



Doctor

MARIO ANDRES POSSO NIETO

JUEZ SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Email: Of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.

REFERENCIA:	RAD. 76001-33-33-007-2024-00199-00
DEMANDANTE:	JUAN CARLOS CRUZ Y OTROS
DEMANDADOS:	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
MEDIO CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA

JUAN DIEGO ORNDORFF MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 94.514.591 expedida en Cali – Valle del Cauca, abogado titulado con tarjeta profesional nro. 147.848 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, según poder especial otorgado en sustitución por la doctora ANA CATALINA CASTRO LOZANO, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 29.180.813 expedida en Cali (V), en su condición de directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica del Distrito Especial de Santiago de Cali, quien tiene delegación en materia de representación judicial y extrajudicial por parte del señor Alcalde según los documentos anexos que acompañan el presente escrito, dentro de los términos de ley paso a contestar la demanda que, a través del medio de control de reparación directa, interpuso el señor Juan Carlos Cruz Rojas y otros.

1. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS:

Sea lo primero manifestar señor juez, que me opongo a las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda, toda vez que, el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, no es responsable de los perjuicios invocados por los demandantes, con ocasión al accidente de tránsito que padeció el señor Juan Carlos Cruz Rojas, el 29 de junio de 2022, cuando transitaba en motocicleta por la calle 25 con carrera 15 de la ciudad.

2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS U OMISIONES QUE MOTIVAN LA DEMANDA:

FRENTE AL HECHO PRIMERO: No me consta. La convivencia es un hecho que debe ser probado por la parte demandante.

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: No me consta. Lo descrito en este numeral, corresponde a una apreciación subjetiva del jurista, en la cual pretende fundamentar sus pretensiones y que debe ser probado en el proceso

FRENTE AL HECHO TERCERO: No me consta. Es un hecho que de acuerdo con la carga de la prueba establecida en el artículo 167 del C.G.P, debe ser probado por la parte demandante.



FRENTE AL HECHO CUARTO: Parcialmente cierto. De acuerdo con la historia clínica aportada al proceso, el señor Juan Carlos Cruz Rojas, solo hasta el 14 de julio de 2022 ingresó al centro médico VALLESALUD para el servicio de curación en miembro inferior derecho. Si bien, al paciente se le diagnosticó fractura de fémur distal condilo femoral derecho, no se observa cuál era su historial clínico para la fecha de ocurrencia de los hechos.

Por otra parte, lo descrito en este acápite es apenas un diagnóstico que no constituye o permite determinar las secuelas o pérdida de capacidad laboral que sea susceptible de ser indemnizada, aunado, que, el señor Juan Carlos Cruz Rojas, no cuenta con la valoración legal que establezca el grado de afectación para realizar su trabajo habitual.

FRENTE A HECHO QUINTO: No es un hecho, corresponde a una apreciación subjetiva del jurista, en la cual pretende fundamentar sus pretensiones y que debe ser probado en el proceso.

3. OPOSICIÓN A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones declarativas de los demandantes, así, como a cualquier tipo de condena en contra de mi representada, porque, como quedará demostrado en el discurrir del proceso, no se acredita la falla del servicio, ni la relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño.

- A los perjuicios morales:

Me opongo a que se emita una condena por concepto de perjuicios morales, la cual fue tasada por el monto total de 235 S.M.L.M.V. Esta objeción se presenta considerando la inexistencia de pruebas de una responsabilidad atribuible al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, así, como de los perjuicios reclamados por los demandantes.

Para cuantificar el perjuicio moral padecido por la víctima directa del daño, su núcleo familiar y personas allegadas en los eventos de lesiones personales, el Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de 2014, unificó los criterios con el fin de establecer los parámetros indemnizatorios a aplicar en estos casos, de acuerdo con la gravedad o levedad de la lesión, de conformidad con la siguiente tabla:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5



En esa decisión se estableció que i) el referente en la liquidación del perjuicio es la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima cuyo manejo se divide en seis rangos, de acuerdo con la tabla señalada, ii) a las víctimas indirectas se les asignaría un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que se hallen respecto del lesionado y, iii) la gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

En el presente caso, es evidente que el daño moral reclamado no tiene sustento probatorio dentro del proceso y su monto igualmente no se ha justificado, ni probado. Como ya se mencionó, la parte demandante se limita a enunciar el daño sin presentar prueba alguna que acredite la gravedad de la lesión, ni de las secuelas o limitaciones que haya padecido el señor Juan Carlos Cruz Rojas, en las actividades ordinarias.

Es claro, que la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que el daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo.

4. RAZONES DE LA DEFENSA

Los demandantes solicitan se declare patrimonialmente responsable al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, y como consecuencia de ello se le condene a pagar unas sumas de dinero por concepto de perjuicios morales, sin acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el supuesto accidente de tránsito, donde el señor Juan Carlos Cruz Rojas sufrió unas lesiones en su rodilla y pierna derecha.

La conducta que reprocha de la administración la enmarca en una falla del servicio, porque a su juicio, la vía donde se presentó el accidente no tenía señalización preventiva que alertara la presencia del supuesto derramamiento de aceite, lo cual fue determinante en la producción del resultado lesivo. Sin embargo, quiero advertir, señor juez, que ninguno de los elementos presentados como evidencia en la demanda, demuestran que el Distrito Especial de Santiago de Cali, haya tenido una conducta irregular y que la misma sea la causa eficiente del daño.

Es de nuestro conocimiento que para que exista la responsabilidad se requiere de tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta inadecuada del agente generador.

De modo, que para poder atribuir el daño a la entidad y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable que aparezca ligado a este por una relación de causa-efecto. Si no se prueba esa relación, no habrá juicio de responsabilidad.

En el presente caso, la parte actora no demuestra una relación de causa-efecto, quienes tenían la carga de probar no solo la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la acción u omisión de la cual él se deriva, sino, además, la existencia de la falla del servicio y demostrar que dicha falla fue la única causante del daño. Como ya se mencionó, el proceso carece de total respaldo probatorio para acreditar los hechos y los perjuicios sobre los cuales se fundamentó la demanda.



A partir del análisis del material probatorio presentado con la demanda, no se encuentra ningún elemento de prueba que respalde el argumento de un derramamiento de aceite en la calle 25 con carrera 15 de la ciudad. No hay evidencia sobre el estado de la superficie de la vía, ni mucho menos se acredita la presencia o mancha de aceite sobre este tramo vial, como tampoco existen pruebas que demuestren que estas circunstancias hayan causado la caída del señor Juan Carlos Cruz Rojas, mientras se desplazaba en una motocicleta.

Con fundamento en el artículo 167 del Código General del Proceso, las partes tienen el deber de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Por consiguiente, les correspondía a los demandantes probar que el día 29 de junio de 2022, el señor Juan Carlos Cruz Rojas transitaba en una motocicleta por la calle 25 con carrera 15 de la ciudad, así como también, la existencia de un derramamiento de aceite en la vía y que esta le hubiese ocasionado el accidente.

No existe una sola evidencia que demuestre, por ejemplo, cual era la ubicación exacta dónde ocurrió el supuesto derrame de aceite, si generó algún tipo de huella o mancha, se ignora si se encontraba esparcido en un espacio a lo ancho o largo de la vía, si se localizaba en el lado izquierdo o derecho de la calzada, si ocupaba un área extensa o reducida, así como su grosor y dimensión que pudiese afectar la maniobrabilidad del vehículo conducido por el actor.

Así las cosas, señor juez, es imposible aseverar el derrame de aceite en la calle 25 con carrera 15 de la ciudad y que este haya sido la causa eficiente del daño que profesan los demandantes, pues no existe prueba que acredite la existencia del mismo, ni de su ubicación, grosor y expansión.

Sumado a lo anterior, el soporte probatorio carece de un informe técnico detallado de autoridad de tránsito competente, en el que se relaten las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que posiblemente ocurrieron los hechos. No se tiene certeza de la hora del accidente, de las condiciones climáticas, del estado e iluminación de la vía, del sentido y carril por donde iba transitando, de los daños del vehículo y de la ubicación o metraje final en que quedó la motocicleta, datos de suma importancia, mas aún si se tiene en cuenta que el señor Juan Carlos Cruz Rojas desplegaba una actividad riesgosa y por este motivo le asistía un deber objetivo de cuidado, tomando las precauciones adecuadas.

Por otro lado, no hay evidencia del vehículo en el que supuestamente se trasladaba el señor Juan Carlos Cruz Rojas, ya que la parte demandante ni siquiera identificó la marca de la motocicleta, el número de placas o matrícula que la identifica, las condiciones técnico – mecánicas, como tampoco probó, si cumplía con los requisitos y permisos legales para circular en la ciudad.

Asimismo, no se tiene información sobre si el señor Juan Carlos Cruz Rojas contaba con licencia de conducción, y se desconoce si para la fecha de los hechos cumplía con las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito y demás normas que regulan la movilidad, lo cual tampoco quedó acreditado en el proceso.

En conclusión, no existen material probatorio que respalde los hechos de la demanda y por ende la responsabilidad de mi representada, incumpliendo la parte demandante con la carga establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso, por lo que le solicito, señor juez, niegue las pretensiones de la demanda.



4.1. FALTA DE ACREDITACION DE LOS ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO:

Frente a la responsabilidad administrativa del Estado por daños causados a particulares, la jurisprudencia tradicionalmente adoptada exige la presencia de tres (3) elementos esenciales:

- a) Un daño causado a un bien jurídicamente tutelado;
- b) Una falla en el servicio por acción u omisión, retardo o irregularidad en su prestación; y
- c) El nexo causal entre uno y otro extremo. Es decir, una relación de causalidad entre la falla o falta de la administración y el daño, sin la cual, aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.

La esencialidad de esos tres elementos llega al extremo de que faltando uno de ellos no se configura la responsabilidad administrativa. En nuestro sistema corresponde al interesado en la indemnización, probar la falla del servicio, la existencia del daño con todas las características que lo hacen indemnizable y la relación de causalidad.

Sobre este particular, considero pertinente hacer referencia a los planteamientos esbozados por el tratadista JUAN CARLOS HENAO, en su libro EL DAÑO, Universidad Externado de Colombia, primera edición, julio de 1.998, pág. 38, cuando afirma:

“(…)

Sin embargo, en ocasiones a pesar de existir daño no procede declarar la responsabilidad. Esto por cuanto el daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad. En efecto, en algunos eventos no se declara la responsabilidad, a pesar de haber existido daño.

Es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe pero no se puede atribuir al demandado, como cuando aparece demostrada una de las causales exonerativas; o el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre”.

Del mismo modo, frente al concepto del Daño, vale traer a colación lo señalado en la obra “EL DAÑO” compilación y extractos José N. Duque Gómez:

“La certeza hace alusión a la verdad de su existencia, como concepto opuesto a todo lo que es hipotético, posible o eventual. Para que el daño sea indemnizable es requisito indispensable que sea cierto, verdadero e incuestionable.”

“...Lo contrario a la certeza es la incertidumbre que se presenta cuando no hay seguridad sobre la real existencia del perjuicio que se invoca; se dice que el daño es incierto cuando los elementos de juicio de que dispone son insuficientes para sustentar su causación. En esta situación de incertidumbre el daño no es reparable y así lo tiene plenamente establecido nuestra jurisprudencia”

Este criterio, encuentra consonancia con lo establecido en el Artículo 167 del CGP, norma general del régimen probatorio, según el cual, *“incumbe a las partes probar el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*



Acerca de la necesidad de probar la falla del servicio, dentro del régimen del artículo 90 de la Constitución Nacional, el Consejo de Estado, en reiterada Jurisprudencia, se ha referido a la necesidad de probar la falla del servicio por parte de la Administración. Es así, como en sentencia de octubre 6 de 1.995, Consejero Ponente, Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 9535, manifestó:

“(…)

Aquí la responsabilidad que pretende imputarse a la administración no se deriva del ejercicio de una actividad desarrollada mediante un nexo instrumental peligroso. Todo lo contrario: ella se deriva (sic) una omisión de la administración.

Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal.

Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acreditar la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el incumplimiento de un deber y demostrar que dicha falta fue la causante del daño.

“(…)”.

Y, en sentencia del 5 de agosto de 1.994, proceso No. 8487, con ponencia del Consejero Carlos Betancur Jaramillo, se manifestó por parte de la Alta Corporación:

“1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa la responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.

La noción de la falla del servicio no desaparece, como lo ha señalado la Sala, de la responsabilidad estatal fundada en el citado artículo 90 de la Carta. Cuando de ella se derive la responsabilidad que se imputa a la administración se constituye en un elemento que debe ser acreditado por el demandante. Así lo ha repetido esta misma Sala. En otros términos, el daño es antijurídico no solo cuando la administración que lo causa actúa irregularmente, sino cuando esta conducta lesiva esté ajustada al ordenamiento.

“(…)”.

En otras palabras, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (la falla del servicio en el lenguaje corriente) tendrá que probarse esa irregularidad, salvedad hecha de los eventos en que esa falla se presume. En ambas hipótesis ese primer supuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño se produjo sin falla o falta de la administración pero el que lo sufre no tenía porqué soportarlo, el acreedor, como es apenas lógico, deberá demostrar el daño y el porqué pese a ser legal la actuación de la administración, no tenía porqué sufrirlo.



En síntesis, la nueva Constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva, no borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender” (Sentencia del 25 de febrero de 1.993, ponente, Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 7742).

En segundo lugar, estima la Sala que para que, en estos casos pueda afirmarse que se presenta la falla del servicio, resulta necesario determinar el alcance de la obligación estatal que se denuncia como incumplida o como cumplida defectuosamente, debiendo orientarse esta determinación hacia la noción relativa de este concepto elaborada por la doctrina y adoptada por la jurisprudencia.

Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente la Sala, que la responsabilidad de la Administración no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en su “vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, para cuya protección están establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede ser obligado a lo imposible.

La noción de la falla del servicio tiene un carácter relativo, pudiendo el mismo hecho, según las circunstancias ser reputado como culposo o como no culposo, en este sentido se pronunció el Consejo de Estado en Sentencia del 11 de octubre de 1.990, Exp. 5737, donde expresó:

“La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el carácter de relativo que presenta la falla del servicio y ha señalado que para hablar de ella hay que tener en cuenta la realidad misma, el desarrollo, la amplitud y la cobertura de los servicios públicos y que ella no puede tener, la misma extensión en un país desarrollado que uno como el nuestro que apenas está en vía de desarrollo.

“Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes que a partir de ese texto que fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada que la determinación es afectada en tales bienes, pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación a que circunstancias de tiempo, modo y lugar, como si hubieran sucedido los hechos así como a los recursos con que contaba la Administración para prestar el servicio para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”.

Sobre el mismo tema, en ponencia del mismo Consejero, doctor Carlos Betancur Jaramillo, expediente 10327, dijo: “Por la actividad peligrosa ejercitada tanto por la administración como por los particulares, debe acudirse a la falla probada del servicio según la cual quien debe sacar adelante sus pretensiones está en la obligación de demostrar que el demandado fue el causante del daño”

En este orden de ideas, es claro que a la parte demandante le correspondía demostrar la existencia de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal, puesto que reprocha una supuesta omisión administrativa, lo cual le genera el deber de probar no solo existencia del daño, sino la falla en el servicio y su relación de causalidad. De ello, como se ha mencionado a lo largo de esta defensa, no existe respaldo que pruebe la consolidación de los mismos.



Así las cosas, al no haber ningún elemento de juicio que acredite la falla en el servicio alegada por la parte demandante, comoquiera que no se demostró en cabeza de mi representada una omisión en el cumplimiento de sus funciones y deberes normativos, se deben negar las pretensiones de la demanda, pues se insiste, del exiguuo material probatorio allegado al proceso, no es posible inferir que las lesiones del señor Juan Carlos Cruz Rojas obedecieran a una falla del servicio imputable al Distrito Especial de Santiago de Cali.

Por consiguiente, a no haber elementos de prueba que demuestren la causa real y eficiente del accidente de donde derivan las pretensiones de la demanda, ni de ninguna conducta omisiva por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, no podrá efectuarse la imputación fáctica requerida en este tipo de juicios de responsabilidad y, en esta medida, deberán negarse las pretensiones de la demanda, pues como bien se resaltó en el acápite correspondiente, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a la parte demandante probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, por encontrarnos en un estadio procesal de régimen subjetivo (culpa probada).

5. CONDENA EN COSTAS

Solicito al honorable juez se condene en costas a la parte demandante, en la medida en que está facultado para ello en virtud de lo establecido en el artículo 188 del C.P.A. y de lo C.A. (Ley 1437 de 2011).

6. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En escrito separado me permito formular Llamamiento en Garantía a la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, CHUBB SEGUROS DE COLOMBIA S.A., MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., SBS SEGUROS DE COLOMBIA S.A. - ANTES AIG SEGUROS GENERALES, en cabeza de su representante legal, con el fin de que se haga parte en el presente proceso, en virtud de la existencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual nro. 1507222001226, con vigencia desde las 00:00 horas del 30 de abril de 2022 hasta las 00:00 horas del 1 de diciembre de 2022.

7. ANEXOS

- Escrito de llamamiento en garantía.
- Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual nro. 1507222001226.
- Certificado de Existencia y Representación de Cámara de Comercio de la compañía llamada en garantía.

8. NOTIFICACIONES

El suscrito, como apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, las recibe en el correo electrónico: ldom.juridico@gmail.com, celular 3008083972.

Las notificaciones del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme lo dispuesto en el art. 197 de la Ley 1437 de 2011, se reciben en el buzón oficial notificacionesjudiciales@cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. recibe notificaciones en la Cra.
80N No. 6 71 de Santiago de Cali, dirección electrónica: njudiciales@mapfre.com.co

Respetuosamente,

JUAN DIEGO ORNDORFF MUÑOZ

C.C. 94.514.591 expedida en Cali – Valle del Cauca
T.P. nro. 147.848 del C.S. de la Judicatura.